

Ecuador: el neoliberalismo por sorpresa

Ecuador: Neoliberalism by storm

Leonardo Frieiro¹

UBA/UTDT
Argentina

Belén Sánchez²

UBA/UTDT
Argentina

Fecha de recepción: 2-09-2020

Fecha de aceptación: 6-05-2021

Resumen

Lenín Moreno fue elegido por su plataforma de continuidad, pero dio un giro de 180 grados respecto de sus promesas de campaña y comenzó a gobernar con una agenda neoliberal. El análisis del viraje revela que no se trata del antagonismo entre dos líderes políticos ni de un cambio en la correlación de fuerzas al interior de Alianza País. Moreno reanudó la historia del transformismo en Ecuador, interrumpida solo por Rafael Correa. Consideramos relevante indagar en el viraje de Moreno porque no se trata de una excepcionalidad sino de un eslabón más de la historia del neoliberalismo que mantiene al país en una crisis de hegemonía recurrente. Nos proponemos, primero, identificar qué elementos permitieron un giro tan drástico como raudo; luego, dar cuenta del carácter estructural y las consecuencias geopolíticas del transformismo, y finalmente ponderar la profundidad del proceso a la luz del levantamiento popular de octubre de 2019.

Palabras clave: Ecuador, Neoliberalismo, Lenín Moreno, Rafael Correa, Transformismo

Abstract

Lenín Moreno was elected for his platform of continuity, but he made a 180-degree turn from his campaign promises and began to govern with a neoliberal agenda. The analysis of this shift reveals that it is not about antagonism between two political leaders or a change in the correlation of forces within Alianza País. Moreno resumed the history of transformismo in Ecuador, interrupted only by Rafael Correa's administration. Moreno's shift is not an exception but rather one more episode in the history of neoliberalism that keeps the country in frequent crisis of hegemony. This paper aims, first, to identify the reasons for such a drastic and rapid turn; then, to give an account of the structural nature and geopolitical consequences of transformismo, and finally to weigh the process in light of the popular uprising of October 2019.

Keywords: Ecuador, Neoliberalism, Lenín Moreno, Rafael Correa, Transformismo

¹ Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires), candidato a magíster en Estudios Internacionales (Universidad Torcuato di Tella). Contacto: frieiro.leonardo@gmail.com.

² Profesora y licenciada en Letras (Universidad de Buenos Aires), candidata a magíster en Estudios Internacionales (Universidad Torcuato di Tella). Contacto: snz.belen@gmail.com.

Introducción

El 2 de abril de 2018, entre protestas masivas por el modelo económico basado en la actividad de las industrias extractivas, por los casos de corrupción en torno a funcionarios del oficialismo y por los derechos reproductivos, el candidato de Alianza País (AP), Lenín Moreno, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador con el 51,6% de los votos, sobre el candidato opositor del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), el banquero conservador Guillermo Lasso, que obtuvo el 48,8%. Pese a la complejidad del escenario para AP, las elecciones de 2017 parecían dejar a Ecuador al margen de la tendencia a favor de la derecha que sumaba victorias a lo largo de América Latina: Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre de 2015 la presidencia en Argentina y, días antes, el 6 de diciembre, la oposición al chavismo había ganado las elecciones parlamentarias en Venezuela; el 23 de febrero de 2016, Evo Morales perdió el plebiscito convocado para habilitar su reelección, el 31 de agosto el Senado de Brasil consumó el golpe parlamentario-judicial-mediático contra Dilma Rousseff y el 2 de octubre, por estrecho margen, ganó el No en el plebiscito por la aprobación del plan de paz en Colombia (Thwaites Rey y Ouviaña, 2018: 18). A estos episodios, se añadieron el triunfo de Sebastián Piñera en Chile y las elecciones fraudulentas en Honduras en noviembre de 2017. En contraste, Lenín Moreno había sido vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013 y fue elegido por su plataforma de continuidad, tal como se desprende de su *Programa de gobierno 2017-2021*. Sin embargo, luego de asumir, muy pronto, Moreno dio un giro de 180 grados respecto de sus promesas de campaña y comenzó a gobernar con una agenda de derecha neoliberal (Ramírez Gallegos, 2018). El ex ministro de Relaciones Exteriores de Rafael Correa, Guillaume Long, sintetiza el curso político con la siguiente frase: “Lenín Moreno consiguió ser electo por la mitad de la sociedad, pero gobierna con la otra mitad” (Vivanco, 2018). La continuidad del proyecto de AP ganó, pero Moreno encontró apoyo social suficiente para ejecutar un programa contrario.

Distintas perspectivas de análisis han propuesto explicaciones del porqué del giro de Moreno. Una parte de la literatura lo identifica como la continuidad de Rafael Correa. González (2019) interpreta que el único cambio relevante no es político ni económico sino el abandono de la retórica progresista que distanció a Moreno de la Ola Rosa. Sancher Freslon

(2018) también reconoce un cambio de estilo, pero subraya el consenso entre ambos en torno al proyecto político, social y económico de un Ecuador megaminero, que denomina ‘mineralo-Estado’. Otros autores entienden el viraje de Moreno como una metamorfosis del correísmo. En este sentido, Acosta (2017) lo describe como un producto propio de la lógica política de Alianza País que, con la traición a la Constitución de Montecristi, sacrificó sus elementos radicales y engendró la traición de su propio proyecto político consumada en Moreno. Ospina Peralta (2017), a partir del análisis de las fuerzas que componen Alianza País, sostiene que es inadecuado interpretar la división del partido como una fractura entre la izquierda y la derecha. En cambio, identifica un desplazamiento dentro de la coalición de gobierno: Moreno expresa la victoria política de un grupo empresarial moderno, secundario durante el neoliberalismo, asociado al consumo interno y favorecido por las políticas de Correa, que desplazó paulatinamente al núcleo de tecnócratas estatistas que tuvo la hegemonía de AP durante las administraciones de Correa. Por su parte, Chiasson-LeBel (2019) formula una tercera lectura para la cual el giro de Moreno se debió a la recomposición social de las derechas, que aprovecharon el declive del ciclo de impugnación al neoliberalismo. La sorpresa del caso ecuatoriano refleja la falta de la atención generalizada a las estrategias de las élites para ganar influencia en los gobiernos posneoliberales, más allá de su desempeño electoral. Por último, fuera de la academia, Guillaume Long explicó el giro de Moreno como un error estratégico: la voluntad de Correa de tornar a Alianza País en una opción más atractiva para sus opositores abrió la puerta a la autodestrucción (Vivanco, 2018) y Rafael Correa aportó una interpretación particular. Moreno no expresa sólo una fractura entre izquierda y derecha sino también una geográfica: la desconfianza histórica de la sierra contra la costa (Pardo, 2017).

En el presente trabajo nos proponemos estudiar este viraje a través del concepto de transformismo, elaborado por Antonio Gramsci en los *Cuadernos de la cárcel* a propósito del proceso de formación del estado moderno en Italia. En su interpretación tanto de los procesos de conformación de los Estados nacionales como en los sucesivos proyectos de modernización capitalista en América Latina, el sociólogo marxista argentino José Aricó sostiene que, a expensas de las formas hegemónicas, “el transformismo constituye una práctica política habitual de las clases dominantes” (2020: 897). En el mismo sentido, en su libro sobre la segunda mitad del siglo XX en Brasil, el historiador Perry Anderson afirma que

“este es el continente por excelencia de súbitas reconciliaciones políticas y repentinos cambios de orientación ideológica” (2019: 31), si bien no indaga en los motivos del fenómeno transformista. En el próximo apartado, nos detenemos en el concepto de transformismo para precisar su definición y justificar su aplicación a la actualidad política ecuatoriana, en función también de la historia de sus estructuras sociales y políticas.

Apuntes sobre el transformismo

Gramsci elabora el concepto de transformismo motivado por el proceso de unificación italiana conocido como *Risorgimento*. En los *Cuadernos de la cárcel*, analiza este fenómeno en la historia contemporánea de su país: “si estudia(mos) toda la historia italiana a partir de 1815, vere(mos) que un pequeño grupo dirigente logró encerrar metódicamente en su círculo todo el elemento político puesto de manifiesto por los movimientos de masa de origen subversivo” (1950: 255). Además, Gramsci discierne dos fases en las que el transformismo opera en diferentes escalas. En la primera etapa, entre 1860 y 1900:

personalidades políticas individuales elaboradas por los partidos democráticos de oposición se incorporaban aisladamente en la ‘clase política’ conservadora-moderada caracterizada por la aversión a toda intervención de las clases populares en la vida estatal, a toda reforma orgánica que propusiera una hegemonía como sustitución del crudo dominio dictatorial. (Gramsci, 1984: 236)

Para Gramsci, el transformismo durante este período es molecular. En cambio, a partir del 1900, cuando hubo “grupos extremistas enteros que se pasan al campo moderado” (1984: 236), predominó el transformismo a gran escala. De acuerdo con Gramsci, el transformismo funciona como “una de las formas históricas de lo que ha sido señalado revolución-restauración o revolución pasiva” (1984: 235-6). En tanto fenómeno propio de la revolución pasiva, el transformismo expresa “el hecho histórico de la ausencia de iniciativa popular unitaria en el desarrollo de la historia italiana” (Gramsci, 1986: 205).

A partir de la aplicación hecha por Gramsci, el historiador Perry Anderson abstrae la definición del concepto en estos términos: “la palabra italiana *transformismo* se refiere al

proceso político —inveterado en su país de origen— por el cual las fuerzas conservadoras van absorbiendo e invirtiendo las presiones radicales hasta ponerlas al servicio de lo opuesto de sus fines originales” (2019: 31). En el apartado dedicado a la hegemonía y el transformismo de su libro *Gramsci y el bloque histórico*, Hughes Portelli señala que, cuando la clase dominante absorbe a los intelectuales (en sentido gramsciano) de otros grupos sociales, el efecto es su decapitación política e ideológica, por lo que el transformismo pone de relieve que la distinción entre hegemonía y dictadura (o dominación) no es siempre esquemática (1977: 75).

Como mencionamos en el cierre del apartado anterior, autores tan diversos como José Aricó y Perry Anderson han señalado la recurrencia del transformismo en América Latina. Nos interesa detenernos en las razones por las cuales se justifica la aplicación de este concepto gramsciano, como así también de otros, a la realidad latinoamericana y, en particular, ecuatoriana, a pesar de las evidentes diferencias de las condiciones para las que fueron generados. Desde fines de los ‘60, el estudio de Gramsci y las lecturas gramscianas se expandieron en la izquierda académica y no académica de América Latina (Aricó, 2020: 867). Esto no se debe a la universalidad de los principios teóricos de Gramsci, pues, como él mismo escribió sobre esta cuestión y el problema metodológico de la investigación, “las ideas no nacen de otras ideas, las filosofías no son generadas por otras filosofías, sino que son expresión siempre renovada del desarrollo histórico real” (Como se cita en Aricó, 2020). Aricó explica el uso de Gramsci a través del concepto de traducibilidad, que se refiere a “la posibilidad de algunos experimentos históricos, políticos y sociales de encontrar una equivalencia en otras realidades” (2020: 871), es decir: “Gramsci podía ser traducido en clave latinoamericana si era posible establecer algún tipo de similitud o sintonía histórico-cultural entre su mundo y el nuestro” (2020: 871). En esta dirección, Juan Carlos Portantiero reconstruyó los principales conceptos de Gramsci pensando su uso en clave latinoamericana en su ensayo *Los usos de Gramsci*. El epígrafe con el que inaugura el capítulo “¿Por qué Gramsci?” es una cita del fragmento 63 del Cuaderno IX de Gramsci que sintetiza estas cuestiones: “Toda verdad (...) debe su eficacia al ser expresada en los lenguajes de las situaciones concretas particulares: si no es expresable en lenguas particulares es una abstracción bizantina y escolástica, buena para el solaz de los rumiadores de frases” (Portantiero, 2019: 101).

Aricó afirma que en la articulación entre la sociedad y el Estado en muchos países de América Latina “el pensamiento de Gramsci parece poder expresarse en lenguas particulares concretas” (2020: 876). Esto se debe a que, como explica Portantiero, Gramsci investigaba la sociedad italiana, esto es, una sociedad no de capitalismo avanzado sino de capitalismo tardío (o periférico) donde “la relación economía, estructura de clases y política no es lineal sino discontinua” y “el desarrollo gira alrededor del estado y sus crisis” (2019: 104). Los conceptos que Gramsci formuló para la crisis estatal y el desarrollo económico desigual de la sociedad italiana pueden encontrar traducciones en las realidades concretas de las sociedades latinoamericanas de capitalismo dependiente. Así como en Italia se buscó construir estatalmente la unidad de las clases dominantes disgregando la voluntad política de las clases populares, de forma análoga:

el proceso de construcción de los Estados latinoamericanos operó sobre este virtual vacío social, que en el caso de los países andinos y de población indígena se logró a costa de reproducir respecto de esta la relación colonizador-colonizado impuesta por los grandes imperios. (Aricó, 2020: 878)

En virtud de esto, muchos análisis toman las herramientas teóricas de Gramsci para analizar la consolidación de los estados nacionales como así también las sucesivas etapas de modernización capitalista en nuestra región. Por ejemplo, en su estudio sobre el rol de la Revolución Mexicana en la formación del Estado moderno, John Womack Jr. afirma que, para abordar “la falla histórica de la burguesía mexicana que jamás se definió como clase predominante” (2012: 36) y que, por lo tanto, terminó apoyando la tiranía y acudiendo al Estado para que condujera la reforma social y política, “al maestro que hay que estudiar para este análisis es Antonio Gramsci, en particular sus notas sobre la historia italiana” (2012: 55). Una solución desde arriba del mismo corrobora Carlos Nelson Coutinho en Brasil desde la independencia política hasta el golpe de 1964, pasando por la república y la revolución de 1930: “la transformación capitalista se ha producido gracias al acuerdo entre los estratos de las clases económicamente dominantes, con exclusión de las fuerzas populares y la utilización permanente de los aparatos represivos y de intervención económica del Estado” (1986: 26).

La historia del capitalismo en Ecuador también tiene este componente elitista y

antipopular. Como señala Pablo Ospina, “la democracia ecuatoriana se instaló en una sociedad desgarrada por viejas exclusiones estructurales de varios siglos”, que implica la marginalización de pueblos enteros (Ospina, 2000: 125). Después de la caída de la autoridad española, las élites ecuatorianas no lograron aglutinar sus intereses detrás de un proyecto hegemónico consensuado entre sus diferentes fracciones (Alexander Rodríguez, 1984: 18). En su lugar, generaron una serie de antagonismos perdurables en la historia de las élites de Ecuador. A lo largo del siglo XIX, se consolidó la disputa entre dos fracciones: los exportadores y banqueros de la costa y los terratenientes de la sierra. Como dice Linda Alexander Rodríguez, “políticamente, el conflicto se expresó en ideologías opuestas: la costa pasó a identificarse con el liberalismo y la sierra con el conservadurismo” (1984: 36). Es en este contexto que podemos identificar los orígenes de la historia del transformismo en Ecuador: Gabriel García Moreno comenzó su carrera como liberal insurgente, pero tan pronto como llegó al poder se pasó al bando conservador (Alexander Rodríguez, 1984: 34). Desconfiando de las fuerzas armadas, Moreno se alió con la Iglesia, pese a que este giro implicaba una transformación ideológica. Como liberal en el poder, se suponía que avanzaría el proceso de secularización del estado (el principal clivaje entre liberales y conservadores, además de la materia económica). Sin embargo, ante la imposibilidad de consolidar su hegemonía desde las fuerzas sociales ligadas al liberalismo, las neutralizó fortaleciendo a la principal institución de los conservadores: la Iglesia. Se trata de un giro de 180 grados porque la Iglesia no solo representaba lo opuesto al proyecto de un estado secular sino también al proyecto económico exportador liberal ya que ella misma era uno de los grandes terratenientes de la sierra.

Simultáneamente, el siglo XIX estuvo marcado por una población en su mayoría analfabeta y ajena a la economía monetaria (Alexander Rodríguez, 1984: 34) y, en lo que refiere a la exclusión de los pueblos indígenas, si bien obtuvieron la igualdad legal y la eliminación del tributo indígena, su incorporación formal significó, en realidad, su invisibilización bajo los elementos seculares del estado moderno (Ospina, 2000: 135). Esta dinámica de crisis de hegemonía y soluciones transitorias desde arriba se repetiría durante el siglo XX. Por eso, como sintetiza Ospina, “el Estado ecuatoriano es el resultado de una larga historia de exclusiones y eficaces sistemas de dominación” (2000: 140). La transición democrática de 1978 estuvo precedida por un proceso de modernización económica

también dirigida desde el estado y, como veremos un poco más adelante, las posteriores decisiones de reformas del capitalismo ecuatoriano también serían tomadas desde arriba.

Las resonancias entre la historia del estado moderno en Ecuador y los ejemplos mencionados sobre México y Brasil se deben a que los procesos de formación de los estados nación y de modernización de los sistemas de acumulación en América Latina son, en verdad, parte del proceso de occidentalización del continente (Aricó, 2020: 892). No se trata de un desarrollo endógeno de las fuerzas sociales y económicas locales sino de la prolongación de un proyecto de modernización concebido en Europa y que, luego, se internacionaliza por medio de la diseminación de ideas desde el centro hacia la periferia. Si la expansión de la modernidad capitalista en el siglo XIX puede interpretarse como un desarrollo internacional que penetró en América Latina, de modo análogo también podemos pensar en el neoliberalismo en América Latina como un derrame del mismo tipo. En este sentido, interpretamos que el neoliberalismo es un orden global que ha ingresado en América Latina a partir de los '70 bajo la forma de una revolución pasiva. Para esta lectura nos apoyamos en la propuesta metodológica desarrollada por Robert Cox en "*Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method*" (1983), donde recupera la noción de hegemonía y la distinción entre centro y periferia de Gramsci para trasladarlas al análisis del orden global. Allí afirma:

La hegemonía global es, entonces, en sus inicios, la expansión hacia afuera de la hegemonía interna (nacional) establecida por una clase social dominante. Las instituciones económicas y sociales, la cultura, la tecnología asociada a esta hegemonía nacional se convierten en patrones de emulación. Este tipo de hegemonía expansiva ingresa en los países de la periferia como una revolución pasiva. (Cox, 1983: 61)

En este sentido, entendemos que el neoliberalismo en América Latina no es hegemónico, es decir, el proceso de naturalización de la dominación de la clase dominante a través de la instalación de sus ideas e intereses en la sociedad en su conjunto no ha sido exitoso. Esto puede explicarse porque, retomando a Cox, los fenómenos internacionales expansivos "no surgen de un vasto desarrollo económico local, sino que son el reflejo de desarrollos internacionales que transmiten sus corrientes ideológicas a la periferia" (1983: 59), donde se crea *ad hoc* una estructura de relaciones sociales. La contracara de la hegemonía es la

revolución pasiva, y el transformismo uno de los principales mecanismos políticos de esta última en la disputa por la hegemonía. En primera instancia, el transformismo parece una expresión de la dirección hegemónica porque permite “la elaboración de una clase dirigente cada vez más numerosa” a través de “la absorción gradual, pero continua y con métodos diversos en su eficacia de los elementos activos de grupos aliados” (1999: 387). Sin embargo, la cooptación puede abarcar “incluso [a grupos] de adversarios que parecían irreconciliablemente enemigos” y conducir “a la decapitación de estos y a su aniquilamiento durante un período a menudo muy largo” (1999: 387). De este modo, el transformismo, cuya finalidad es la dirección política, puede ser concebido también como una función de la dominación. Así como Portelli explica con respecto a la Italia de Gramsci (1977: 80), en el presente trabajo intentaremos mostrar que la absorción de Lenín Moreno no tuvo por objetivo darle amplio apoyo popular a la fracción de clase promotora del proyecto neoliberal, sino que su objetivo era perpetuar su dominación. Por esto mismo, también vamos a preguntarnos si la estrategia logró efectivamente impedir la reorganización del grupo adversario o la formación de uno nuevo.

En Ecuador, observamos que las relaciones de dominación hegemónica han sido inestables desde el inicio de la etapa neoliberal. Fernando Martín Mayoral sintetiza que:

Desde inicios de la década de 1980, Ecuador inició un proceso de mayor inserción en la economía global mediante políticas económicas de «estabilización» y luego, paulatinamente, a través de políticas de «ajuste», enmarcadas en la corriente neoliberal, cuya finalidad principal fue readecuar la economía a las demandas del capital transnacional. Estas políticas fueron aplicadas a partir de la presidencia de Osvaldo Hurtado (1981-1984), quien sucedió a [Jaime] Roldós luego de que este falleciera en un accidente de aviación, y luego profundizadas por León Febres Cordero (1984-1988) y posteriormente por Sixto Durán Ballén (1992-1996). (Martín Mayoral, 2009)

La volatilidad ideológica se ve reflejada en acuerdos políticos y sociales precarios, y desequilibrios del esquema de representación que han arrastrado el sistema político hacia una inestabilidad estructural. Desde la transición democrática en 1978 hasta la asunción de Rafael Correa en 2007, Ecuador tuvo doce presidentes y siete de ellos no completaron su

mandato. La vulnerabilidad ideológica de la dirigencia política impidió la consolidación del sistema de partidos desde la transición democrática y condujo, en cambio, a un multipartidismo extremo crónico y sumamente inestable: en 1988, Ecuador tenía el índice Rae de fragmentación partidaria más alto de 19 países en América Latina y el Caribe (Mejía, 2002: 288). La profundidad de la crisis del sistema de partidos fue tal que en 1994 triunfó una consulta popular que habilitaba a candidatos independientes a presentarse a elecciones sin requisitos de afiliación partidaria (Paz y Miño Cepeda, 2012). Flavia Freidenberg analiza los principales problemas del sistema político ecuatoriano antes de la elección de 2009 (2011: 67-68), pero aquí basta decir que, sin partidos nacionales fuertes, los presidentes han protagonizado los más inesperados giros en su orientación ideológica. Incluso quienes dirigían sus campañas a los sectores populares con una retórica de izquierda, explica Becker, “una vez en el poder, gobernaban en contra de los intereses de clase de esa base para apaciguar las preocupaciones económicas y políticas conservadoras” (2017: 129). Rodrigo Borja de Cevallos, el líder de Izquierda Democrática electo en 1988, pregonó políticas de ajuste, como la restricción del gasto público y la emisión monetaria, y endeudamiento; Abdalá Bucaram, el candidato de centro-izquierda electo en 1996 por el Partido Roldosista Ecuatoriano que él mismo había fundado, fue cultor del neoliberalismo, y Lucio Gutiérrez Borbúa, llegó a la presidencia en 2003 de la mano del movimiento indígena, pero concedió el poder económico y político al establishment neoliberal. Así, el transformismo en Ecuador toma una dinámica particular, pues el viraje de los presidentes tras su arribo al Palacio de Carondelet ha generado efervescentes protestas de masas e interrupciones de los mandatos carentes de legitimidad, pero también la desmovilización rápida y la pérdida de capacidad de maniobra de esos grupos disgregados por su decapitación política.

La llegada de Correa fue consecuencia de un cambio en la movilización social contra el transformismo. La caída del gobierno de Lucio Gutiérrez en 2005 no fue producto de la movilización de la población indígena que, desde la formación de la CONAIE, había sido el actor colectivo clave de impugnación de los gobiernos que accedían al poder con la promesa de reformas radicales, pero luego administraban neoliberalismo. Gutiérrez dividió al movimiento indígena y fue desplazado por “un amplio movimiento de clases medias, un ‘movimiento cívico’ que reaccionó a la corrupción y la privatización de bienes públicos como la electricidad y la telefonía” (González, 2019: 95). Desmovilizada la CONAIE y dinamitada las

opciones de intermediación política de la élite, las clases medias urbanas, pese a su desorganización política y partidaria, se convirtieron de forma fugaz en el sector social determinante para la resolución de la crisis de hegemonía. Más tarde, Correa definiría a su gobierno como la expresión política directa de “los forajidos”, ese movimiento espontáneo de disidencia cívico que comparó con los indignados del 15M español (Ríos, 2012).

El triunfo de Correa también manifiesta la crisis del sistema partidario. Clark y García señalan que Alianza País no nació como un partido político sino como una plataforma para la campaña presidencial y que su consolidación como partido se produjo una vez en el gobierno (2019: 5). Correa supo sacar provecho de la volatilidad identitaria de la política ecuatoriana, capturando tanto a dirigentes y activistas de partidos de izquierda (el Partido Socialista, Movimiento Popular Democrático, Pachakutik, Partido Comunista del Ecuador e Izquierda Democrática), como a referentes políticos y caciques de la costa y la región amazónica sin trayectoria en la izquierda (Clark y García, 2019: 6).

Rafael Correa llegó a la presidencia en tiempos de crisis política y resistencia a las políticas económicas neoliberales, y respetó su promesa de campaña de liderar la revolución ciudadana: “desplazó a las viejas élites y consolidó hegemonía propia en su lugar” (Torre, 2018: 80). En sus gobiernos, se enfrentó con éxito a las élites del neoliberalismo no sólo por la política económica que permitió duplicar el gasto social, sino también porque limitó su influencia en el aparato del Estado. Esto es relevante porque, como explica Chiasson-Le Bel, desde el retorno de la democracia, las élites económicas habían tenido capacidad de influir en el Estado e incidieron negativamente en la duración de los gobiernos porque las políticas que promovían no encontraban consenso en los sectores populares que, movilizados, lograron interrumpir las presidencias de Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en el 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005 (2019: 158). Una década después, pese a mostrarse como un modelo económicamente exitoso y electoralmente infranqueable, el legado de Rafael Correa se puso en cuestión tan pronto como abandonó la presidencia. El distanciamiento de Lenín Moreno, en primera instancia más estético que estructural, lo convirtió más que en su heredero en una alternativa viable atractiva para las clases medias. Una vez en el poder, la diferencia se reveló estructural cuando, de inmediato, disolvió las políticas redistributivas que generaban polarización con las élites, se alió con las fuerzas políticas de la derecha derrotada en las elecciones para implementar una política económica de austeridad y

liberalización, y una política exterior de plegamiento a Estados Unidos.

Consideramos que estudiar el viraje de Moreno es relevante porque no se trata de una excepcionalidad sino de un eslabón más de la historia del neoliberalismo, en tanto régimen de dominación, cuyas características mantienen al país en una crisis de hegemonía permanente. Lenín Moreno reanudó la historia del transformismo en Ecuador, interrumpida solo por Rafael Correa. Con esto, remitimos a una mecánica de recomposición capitalista en su fase neoliberal por medio de una revolución desde arriba, en las antípodas de lo que el proyecto posneoliberal de la Revolución Ciudadana intentó instituir como modelo teórico y político de cambio entre 2006 y 2017. En este punto, es necesario marcar que nuestra interpretación entra en colisión con otra bastante extendida que utiliza el concepto de transformismo para interpretar los gobiernos (o, mejor dicho, liderazgos) de la Ola Rosa. Esta línea de análisis identifica los procesos políticos posneoliberales como, en última instancia, estabilizadores de la hegemonía neoliberal. Entre otros, se destacan los trabajos de Svampa (2013) sobre Argentina, de Muñoz (2014) sobre Ecuador, de Webber (2017) sobre Bolivia, y de Modonessi (2013, 2017) sobre el ciclo latinoamericano en general. En contraste, proponemos no solo que no son situaciones equiparables al transformismo como lo encarna Lenin Moreno, sino que se trata de fenómenos de distinta naturaleza conceptualmente. Una cosa pueden ser las limitaciones (externas o autoimpuestas) de los gobiernos de la Ola Rosa para transformar las estructuras sociales, políticas y económicas que dan forma al orden neoliberal, y otra, la resolución de una crisis de hegemonía por la vía del transformismo con el fin de una revolución-restauración, esto es: una salida desde arriba, elitista y antipopular. Interpretamos que el concepto gramsciano de transformismo aplica a este último caso.

En los próximos apartados nos proponemos, primero, identificar qué elementos permitieron un giro tan drástico como raudo; luego, dar cuenta de los indicadores del transformismo, y por último ponderar la profundidad del proceso a la luz del levantamiento popular de octubre de 2019. En la conclusión, intentaremos reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de la salida transformista al gobierno de la Ola Rosa.

El transformismo derrocado (2006-2017)

Rafael Correa accedió al poder producto de una crisis de hegemonía del neoliberalismo y con

una promesa de refundación política, social y económica de Ecuador. No fue el primer presidente en anunciarlo: Lucio Gutiérrez había prometido “refundar y cambiar el país” en su discurso de asunción y Alfredo Palacio, cuando asumió transitoriamente tras la destitución de Gutiérrez, dijo: “A partir de hoy, refundaremos la república”. Correa fue más consecuente que cualquiera de sus antecesores. La conformación del gabinete, la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la auditoría de la deuda soberana ilustran su decisión de impugnar el modelo neoliberal.

Sin empresarios, representantes de la élite económica, personalidades públicas ni políticos profesionales, el primer gabinete de ministros de Correa supuso una ruptura histórica que daba cuenta de un cambio de época. El gabinete se destacaba únicamente por el grado de formación académica de sus integrantes: el 33% tenía un título de doctorado y el 45%, de maestría, de modo que el 78% presentaba un posgrado de cuarto nivel en adelante (Castillo Merino, 2016: 122). Los ministros no solo eran prácticamente desconocidos para la población, sino que además estuvieron abocados desde el inicio de la gestión a ejecutar las promesas de la campaña. Esta nueva capa de políticos profesionales, altamente educados y sin compromisos con la élite económica, modeló una forma particular de populismo que Torre califica de tecnocrático y que suponía “la transformación técnica y racional del modelo de desarrollo de Ecuador” (2018: 81). El gabinete tecnocrático e interdisciplinario que encabezaba, le permitió a Correa usurparle el discurso de la modernización y la eficiencia al neoliberalismo.

Entre las propuestas de campaña de 2006, Correa incluyó la convocatoria a una Asamblea Constituyente que desconociera a los legisladores del Honorable Congreso Nacional y redactara una nueva Carta Magna. El proyecto de cambio político avanzó en uno de los puntos de mayor disgregación de la élite, como así también de mayor apoyo de la ciudadanía que lo legitimó en una sucesión de citas electorales que Freidenberg lista: el 15 de abril de 2007, la consulta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue apoyada por más del 80% del electorado; el 30 de septiembre de 2007, AP y los movimientos políticos cercanos a Correa consiguieron 79 de los 130 escaños de la Asamblea Constituyente, y el 28 de septiembre de 2008, el 63,93% de los ecuatorianos ratificó la nueva Constitución (2011: 64). La destitución de los diputados del antiguo Congreso Nacional y el hecho de que 79 de los asambleístas constituyentes fueran de AP muestran hasta qué punto

la crisis de hegemonía había descompuesto el sistema político ecuatoriano. A su vez, este escenario se reflejó en un texto constitucional que no representaba los intereses de la élite e incluso intentaba cercenar su influencia (Chiasson-Le Bel, 2019: 159). Ejemplo de ello son las restricciones formales sobre la propiedad que forzaron al principal conglomerado financiero del país desprenderse de su participación accionaria en medios de comunicación masiva.

En el mismo sentido, mediante el Decreto Ejecutivo 472 (2007), el gobierno creó la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público para revisar las condiciones bajo las cuales Ecuador había tomado deuda en el mercado de capitales. Elaborado el *Informe final de auditoría integral de la deuda ecuatoriana* (2008), el Ministerio de Economía encabezado por el economista de izquierdas Ricardo Patiño suspendió unilateralmente el pago de los bonos considerados ilegítimos debido a que los acreedores habían dirigido las condiciones de crédito con la complicidad de la Procuraduría del Estado. Así, bajo la doctrina legal de las deudas odiosas e ilegítimas (Frydman, 2013), comenzó uno de los procesos de renegociación más exitosos de América Latina, que culminó con la refinanciación de la deuda a un 30%, con un porcentaje de adhesión al acuerdo superior al 90%.

El gobierno de AP asumió una serie de compromisos políticos compleja porque vinculaba las demandas de los dos grupos sociales más castigados por el neoliberalismo: las periferias urbanas y las comunidades indígenas. De acuerdo con los datos ofrecidos por Larrea Maldonado, entre 1995 y el 2000, la pobreza asciende de un 55,9% a un 68,8%; en las áreas urbanas pasa de 42,4% a 51,6%, y en las áreas rurales de 75,8% a 84,1% (2004: 50). La composición dividida del campo popular en Ecuador es el primer gran desafío para consolidar la hegemonía de un proyecto alternativo al de las élites neoliberales. En el inicio, AP lo logró con cierto éxito. Correa llegó a la presidencia como el representante de la insurrección de las clases medias urbanas contra Lucio Gutiérrez; luego, la adopción del *sumak kawsay* como objetivo final de la revolución ciudadana tendió un puente con los pueblos indígenas que parecía improbable después de que Correa se negara a ceder su lugar como candidato al líder de la CONAIE Luis Macas, cuya candidatura fue impulsada por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, que no apoyó a Correa. Sin embargo, más temprano que tarde, se evidenció la fragilidad del equilibrio y la condicionalidad de los apoyos, cuando emergieron diferencias en torno al modelo de desarrollo: mientras los sectores moderados esperaban una renegociación integral de la riqueza que no rompiera los patrones básicos de la

acumulación capitalista ni cambiara el lugar del país en las cadenas globales de valor, los más radicalizados reclamaban la búsqueda de una salida poscapitalista. La salida de Alberto Acosta del gobierno, la iniciativa Yasuní-ITT, el triunfo electoral de 2009 y la crisis política de 2010 nos permiten abordar estas tensiones al interior de AP y sus efectos en la disputa por la hegemonía.

El 24 de junio de 2008, Alberto Acosta renunció a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Proveniente de Pachakutik, había participado de la redacción del plan de gobierno de la revolución ciudadana, había sido ministro de Energía y Minas y asambleísta constituyente por AP. Era el principal referente a la izquierda de Correa. Lo que emergió como un reproche por un déficit en el diálogo con los movimientos sociales para la redacción de la nueva constitución y críticas al estilo verticalista de Correa rápidamente se convirtió en la primera ruptura por izquierdas de Alianza País debido al modelo de desarrollo elegido por el gobierno. Acosta era la expresión de un grupo que pensaba que “quien apuesta por la sola extracción de recursos naturales para el crecimiento de su economía no consigue el desarrollo” (Rojo Letón, 2010). Las discrepancias entre Correa y Acosta importan porque resumen las fisuras sobre las que se resquebrajarían Alianza País y su movimiento. El debate en torno a la explotación del área petrolera Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) en el Parque Nacional Yasuní refuerza esta lectura.

En 2007, el gobierno presentó la iniciativa Yasuní-ITT, una novedosa propuesta de ecología política: Ecuador se comprometía a no explotar la zona con más biodiversidad del planeta a cambio de una compensación de la comunidad internacional. Para Acosta, la izquierda más intransigente y los movimientos indígenas, la explotación no era negociable; para Correa, quedaba sujeta a la contribución económica recaudada. Se esperaba recaudar U\$3.6 mil millones, pero en 2013 los fondos prometidos sumaban U\$336 millones y los fondos entregados apenas U\$14 millones (González, 2019: 98). Entonces, Correa anunció que “el mundo nos ha fallado” (Giménez, 2016) y que “no tenemos otro camino, necesitamos ese dinero para superar la pobreza” (Carol, 2014). En 2014, se concesionó el área petrolera de Yasuní, pero las perforaciones no comenzaron sino hasta 2018, bajo el gobierno de Lenín Moreno (González, 2019: 98). Pese a la promesa de Correa de construir un modelo de extractivismo “socialmente responsable” (González, 2019: 103), los movimientos indígenas llegaron a calificar su política económica de racista: el extractivismo, aunque

orientado a financiar políticas sociales, perjudicada a sus pueblos (Becker, 2017: 130).

Retrocedamos al 26 de abril de 2009, la quinta cita electoral de la revolución ciudadana. A pesar de los conflictos apuntados, Correa había dado respuestas a las periferias urbanas empobrecidas, como así también al movimiento indígena políticamente más organizado, más golpeado aún por el neoliberalismo extractivista. Como señalan Gardner y Richards, las reformas neoliberales que establecieron una economía orientada a la exportación acarrearón consecuencias económicas, culturales, políticas y ambientales que impactaron de forma diferencial en los pueblos indígenas y sus territorios (2019: 851-854). La población urbana acompañó el plan de regularización del empleo (abordado en el Mandato Constituyente nº 8), las políticas de reparación y memoria histórica, el aumento del Bono de Desarrollo Humano y la construcción de un estado administrativamente eficiente y burocráticamente uniforme. Durante la primera etapa, Correa también contó con el apoyo crítico del movimiento indígena cuya participación en la Asamblea Constituyente se reflejó en la incorporación de los conceptos de *Pachamama* y *sumak kawsay* y la atribución de derechos propios a la naturaleza en la constitución, dos decisiones de ecología política novedosas que dan cuenta de la presencia de las cosmovisiones de los pueblos indígenas (Gudynas, 2009: 37).

Las elecciones de 2009, las primeras bajo la constitución aprobada en septiembre de 2008, fueron completamente novedosas: se acortó el tiempo de campaña, se puso controles al gasto electoral y la Comisión Nacional Electoral administró las franjas publicitarias (Freidenberg, 2011: 69). Así, las fuerzas políticas competían en condiciones más igualitarias. Rafael Correa fue reelecto presidente con el 52% de los votos. Pachakutik apoyó la reelección de Correa; el principal candidato de la derecha, Lucio Gutiérrez, consiguió buenos resultados solamente en la región amazónica, y Álvaro Noboa, el único representante de la cúpula empresarial, obtuvo apenas el 11,4%. Mientras tanto, AP ganó 58 de los 124 escaños de la Asamblea Nacional y la victoria a escala nacional se replicó en las alcaldías y prefecturas de Quito, Cuenca, y Santo Domingo. Pero la solidez electoral de Alianza País eclipsaba el complejo equilibrio de fuerzas de su composición interna. Sin amenaza de las derechas a la vista, la consolidación de su proyecto estaba en buena medida atada a la continuidad de los compromisos que mantenían el equilibrio entre las tendencias internas del partido y los grupos sociales que apoyaban al gobierno. Pronto, el inicio del segundo mandato de Correa

despejó los interrogantes sobre la forma de ejercer el poder y la política económica, y el rumbo quedó definido por dos rasgos interrelacionados. Por una parte, se optó por el programa neodesarrollista que Clark define como “la transformación de la matriz productiva de la economía, esencialmente a través del desarrollo de los sectores secundarios y terciarios de la economía” (2019: 355). Así, tomó forma la variante ecuatoriana del proceso regional posneoliberal que Svampa denomina el “consenso de las commodities” (2012). Esta decisión tuvo una vigencia extendida: en 2013, era el vicepresidente Jorge Glas uno de los promotores del neodesarrollismo, centrándose en la expansión de valor agregado en la producción de alimentos (2019: 355). Por otra parte, la centralización de la toma de decisiones en Correa se convirtió en una impronta político-institucional necesaria para aplicar dicha política económica, que colisionaba no sólo con los intereses de los grupos indígenas que habían apoyado a Alianza País sino también con la nueva Constitución y sus objetivos. La Ley de Minería sancionada en 2009, por ejemplo, si bien introducía avances a la legislación previa, contradecía el mandato de protección ecológica dictado por la Constitución de Montecristi. Su aprobación demostró la permeabilidad del gobierno al lobby de las empresas extractivistas de capital extranjero, principalmente canadiense, que expresaron su entusiasmo por las modificaciones del marco legal para la minería a gran escala (Gordon y Webber, 2016: 232). Por su parte, la centralización fue interpretada por buena parte de la izquierda como la clausura de los espacios democráticos para influir en la dirección de las políticas del gobierno y, por ende, como una pulsión autoritaria, tal como lo ilustra la separación de Ruptura 25, fundada en su negativa a acompañar una reforma de la Constitución de Montecristi.

Esto supuso una suerte de desdoblamiento de la acción de gobierno durante la segunda presidencia de Correa. En materia de política exterior, sostuvo una línea rupturista que desafiaba las pretensiones de los Estados Unidos en la región. En 2009, Correa se negó a renovar el permiso de la base militar en Manta y avanzó en la incorporación de Ecuador a la organización internacional promovida por Hugo Chávez, el ALBA-TCP. En junio de 2012, firmó un decreto que prohibió el envío de soldados ecuatorianos a la infame Escuela de las Américas y tomó su decisión de política exterior más arriesgada: otorgarle asilo al activista y fundador de WikiLeaks Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Estas definiciones contrastaban con el compromiso del gobierno con el extractivismo que ataba a

Ecuador a la demanda global de productos primarios y a la intermediación de grandes corporaciones multinacionales ligadas a la minería y el petróleo. El desacople de las dos caras de la revolución ciudadana encontró su mejor reflejo en la Cumbre del ALBA realizada en la ciudad de Otavalo en 2010. Mientras los presidentes debatían el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los activistas de la CONAIE rodearon la cumbre para denunciar que no habían sido invitados y, cuando intentaron ingresar, fueron reprimidos por la policía. Correa advirtió que no se dejaría chantajear por las “posiciones extremistas y fundamentalismos ecologistas” (Mena Eraso, 2010). Un mes antes, había denunciado a la central indígena como partícipe de una conspiración en su contra, a raíz de la ola de movilizaciones que lo obligó a pedir a los asambleístas de AP, pese a tener la mayoría, que rechazaran un proyecto de ley que regulaba el uso del agua.

La crisis política de 2010 expuso los riesgos políticos que suponía para Alianza País socavar su coalición de gobierno y su base social de apoyos. La inclusión de las fuerzas de seguridad en la nueva Ley de Servicio Público que eliminaba premios y bonificaciones sobre el salario desató una crisis política. Correa, con mucha vocación televisiva, intentó negociar personalmente con los amotinados, pero la escalada de tensión con disparos y bombas de gas lacrimógeno derivó en el secuestro del presidente, la declaración del estado de emergencia, una cadena nacional de más de ocho horas y el rescate cinematográfico de los grupos especiales de las Fuerzas Armadas en medio de un tiroteo. Por la noche, Correa retornó al palacio presidencial y anunció que no habría “ni olvido ni perdón” (TeleSur TV, 2010) para los amotinados. Cuatro días después, el gobierno intentó dar vuelta la página aumentando el sueldo de la policía alrededor del 40%. La crisis del 30 de septiembre de 2010 dejó un aprendizaje político: Alianza País descubrió la pasividad de sus bases, aspecto que Clark y García subrayan en comparación con las bases del MAS y del chavismo en Bolivia y Venezuela respectivamente (2018: 9-10). La jornada no estuvo protagonizada por la acción política organizada de las masas correístas sino por una ola de saqueos, violencia callejera, incertidumbre y pánico. El llamado del canciller Ricardo Patiño a salir “pacífica, patriótica y valientemente a las calles para rechazar el golpe de estado” (como se citó en Europapress, 2010) no tuvo una repercusión cabal. Fueron las Fuerzas Armadas las que ratificaron su plegamiento al orden constitucional y desempataron la situación.

El 17 de febrero de 2013, las elecciones le asignaron a AP un triunfo rotundo. Esta vez, la derecha mostró dos caras diferenciadas. Mientras las candidaturas reiteradas de Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa reflejaban los restos insepultos de la vieja élite oligárquica, dos nuevas opciones buscaron la renovación conservadora emulando el discurso tecnocrático y modernizante de Rafael Correa: Guillermo Lasso (Movimiento Creando Oportunidades) y Mauricio Rodas (Sociedad Unida Más Acción). Con un alza del 5% en la participación, Correa fue reelecto en primera vuelta con el 57,17% de los votos y perdió solamente en la provincia amazónica de Napo (CNE, 2014). Sin embargo, en este punto, identificamos una paradoja: el período de gobierno con el mejor resultado electoral se corresponde con el de mayor debilidad en términos políticos. Sus votantes, aunque arrolladores para el ejercicio electoral, estaban desmovilizados debido a que, como explica Webber, había cambiado el clivaje político: “La escena estaba determinada no por el eje de la reacción de la derecha al gobierno sino más bien por las crecientes disputas del gobierno con los movimientos populares y sus aliados históricos” (2017: 49). Simultáneamente, proliferaban los vínculos con el sector empresarial, que bajo nuevos liderazgos readecuó su estrategia para influir en las decisiones del gobierno (Chiasson-LeBel, 2019: 161). La permeabilidad del lobby empresario se cristalizó en la creación del Ministerio de Comercio Exterior con el objetivo de reencausar a Ecuador en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre los países andinos y la Unión Europea, un acuerdo neoliberal por el que había abogado la oligarquía exportadora.

La tercera presidencia de Rafael Correa se caracteriza por la incapacidad de construcción hegemónica que proponemos abordar en tres dimensiones: la derrota electoral en 2014, el agotamiento del modelo económico y el crecimiento de la movilización social contra el gobierno. Apenas un año después del triunfo arrollador, una dura derrota en las elecciones regionales hizo tambalear el edificio de AP, que perdió las alcaldías de las grandes ciudades. Los resultados demostraron que la renovación de la derecha había sido exitosa: habiendo recompuesto su oferta electoral con una nueva capa de dirigentes políticos que dejaban atrás la imagen paupérrima de los gobiernos de Gutiérrez, Mahuad y Bucaram.

El rumbo errático del tercer período responde al agotamiento del modelo de desarrollo. Riofrancos (2019) explica que las rentas de los recursos naturales que habían respaldado la expansión del gasto social y la mejora de los indicadores de pobreza,

desigualdad y desarrollo humano demostraron su precariedad cuando el boom de las materias primas se hundió. Entre 2007 y 2014, la pobreza se redujo del 37,6% al 22,5% y el PBI creció 4 puntos por año (González, 2019: 104), pero en 2015 la caída de los precios del petróleo y del dólar no sólo sumió a la economía en una recesión, sino que llevó al gobierno a aplicar las medidas de austeridad a las que se había opuesto. El presupuesto del año siguiente recortó el gasto social, por ejemplo, reduciendo las jubilaciones y restringiendo el acceso a los programas de transferencia directa (Riofrancos, 2009). Insuficiente para saldar la crisis fiscal, se aceleró el proceso de endeudamiento: entre 2009 y 2017, la deuda pública aumentó de U\$S10 mil millones a U\$S43 mil millones (González, 2019: 104). El incremento fue tal que, por ejemplo, en 2014, el Presupuesto General del Estado asignó el 3% del PBI a educación y cultura (Bazante Alvarado, 2016: 19), y el egreso por servicios de la deuda pública representó el 4,9% del PBI (Bazante Alvarado, 2016: 31). A su vez, la austeridad que describe Riofrancos contrasta con la suerte de los grupos económicos que “mantuvieron intacta su concentración de riqueza y medios de producción” (Acosta, 2020: 404). Pese a que la administración de la crisis fue creativa considerando la dolarización de la economía, y la salida, relativamente exitosa en contener los efectos recesivos y reactivar el ciclo (Weisbrot et al., 2017), cada medida que Correa lanzó lo confrontó con parte de la sociedad.

En noviembre de 2014, propuso una reforma laboral que ni los sindicatos ni las cámaras empresarias recibieron de buen grado. Los sindicatos la rechazaron con el argumento de que ceñía la libertad de organización, sobre todo en el sector público, y conquistas laborales previas. Junto con la CONAIE, se movilizaron en Quito, Guayaquil, Latacunga, Loja y Cuenca. En cuanto a las cámaras empresarias, interpretaban que los umbrales salariales y la regulación del reparto de utilidades de las capas gerenciales era un avasallamiento estatal sobre la actividad privada.

En enero de 2015, se lanzó el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, un programa que ponía a la familia como base de la sociedad y, por tanto, responsable también de la educación sexual. El Plan reemplazó la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo de Adolescentes (ENIPLA) que Correa criticaba por incentivar el “hedonismo más puro y más vacío: el placer por el placer” (Estrella, 2015a) y repartir condones “como chicles” (Estrella, 2015b). En consonancia, la directora del Plan, Mónica Hernández definía la abstinencia como política pública y el

autocontrol como un valor (Yépez, 2015) y vinculaba los embarazos adolescentes con la precocidad sexual y la desprotección de la madre y el padre (Estrella, 2015c). El Plan Familia rompió la relación del gobierno con las organizaciones feministas que, si bien nunca habían formado parte de la coalición de gobierno, empezaban a adquirir relevancia en la escena pública. La ampliación de los derechos reproductivos y sexuales era incompatible con la intromisión de la religión en el Estado. Así lo confirmó la invectiva de Correa contra la asambleísta de AP Paola Pabón, cuando propuso debatir la legalización del aborto.

En junio, Correa envió a la Asamblea dos proyectos: la Ley de Herencias y la Ley de Plusvalías Extraordinarias, dos impuestos progresivos que gravaban la herencia y las ganancias extraordinarias de la especulación inmobiliaria, respectivamente, con el fin de distribuir la riqueza. Pese a tener mayoría legislativa, las limitaciones políticas impidieron la aprobación de la última gran medida progresista de las administraciones de Alianza País. El asambleísta Andrés Páez (CREO), el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot (Partido Social Cristiano), el alcalde Quito Mauricio Rodas (SUMA), y el banquero y político Guillermo Lasso (CREO) fueron las principales figuras de la oposición de derechas en iniciar un proceso de movilizaciones que logró interpelar a afectados imaginarios de las leyes, como las clases medias y los gremios. Las protestas de rechazo a las leyes escalaron en masividad y violencia hasta convertirse en un movimiento anticorreísta. El ciclo de movilizaciones se completó con la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la CONAIE a una huelga general para el 13 de agosto. La confluencia de las clases medias y altas urbanas en las calles se amplió con la presencia de organizaciones sindicales e indígenas en todo el país, con un cúmulo de reivindicaciones contradictorias. Mientras unos protestaban contra los impuestos a la herencia y la plusvalía inmobiliaria, algunas organizaciones sociales pedían la derogación del Decreto 16 (2013), el movimiento indígena se oponía a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y los sindicatos a la reforma del Código de Trabajo, el colegio médico pedía la derogación de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepaga, y el movimiento estudiantil exigía el libre acceso a la universidad. El apoyo político a la huelga y la movilización fueron igualmente eclécticos: desde el partido de izquierda revolucionario Unidad Popular y la Federación de Estudiantes Universitarios hasta los partidos de derecha referenciados con Álvaro Noboa, Jaime Nebot y Lasso. Si la derecha había triunfado en las urnas hacía menos de un año, ahora su victoria también era en las

calles. El efecto político más profundo del ciclo de protestas de junio y agosto de 2015 fue el compromiso público de Correa a no postularse para las siguientes elecciones, aun cuando el 3 de diciembre la Asamblea aprobara, también entre movilizaciones, la enmienda constitucional que habilitó la reelección indefinida. Pese a la promesa de Correa y sus asambleístas de que la Constitución de Montecristi duraría más de 300 años, con esta enmienda acumuló 23 modificaciones en apenas nueve. Este dato es relevante porque el texto constituye el corpus normativo de la revolución ciudadana de modo que las modificaciones, impulsadas por el gobierno mismo, ilustran los límites de su consolidación hegemónica.

Así, Alianza País llegó a las elecciones presidenciales de 2017 en franca caída social, económica y política. Anclándose en el centro, Rafael Correa nominó a Lenín Moreno a la presidencia y, aunque estuviera en el foco de las acusaciones del caso Odebrecht, eligió al más cercano Jorge Glas para la vicepresidencia. En la campaña, Moreno no prometía consolidar la Revolución Ciudadana sino una desideologizada apelación a la unidad: “No somos un país dividido (...) nuestro Gobierno será de todo un pueblo (...) El proceso revolucionario debe reinventarse (...) Debemos estar abiertos al cambio, a la innovación, a la autocrítica”, dijo en la Convención que lo nominó (como se citó en EFE, 2017). El resultado de las elecciones no sorprende, pero fue una decepción para AP. Moreno no logró alcanzar el 40% de los votos para ganar en primera vuelta. A diferencia de las elecciones de 2013, esta vez, la izquierda no correísta agrupada en Acuerdo Nacional por el Cambio obtuvo el 6,71% de los apoyos y le trajo consecuencias electorales a AP: en las tres provincias donde más votos reunió, AP perdió.

Becker afirma que en la segunda vuelta Moreno conservó el apoyo de las capas bajas que habían abandonado la pobreza durante el gobierno de Correa y Lasso reunió los votos de las clases medias-altas urbanas y de las comunidades rurales e indígenas donde las políticas distributivas de AP no habían llegado (2017: 128). El fraccionamiento del voto indígena que Becker detalla (2017: 130-131) generó un escenario de incertidumbre, de modo tal que la victoria de Moreno por menos de dos puntos porcentuales fuera cuestionada por Lasso que convocó a sus votantes a salir a la calle. Sin herramientas ni promesas de extender la Revolución Ciudadana, Moreno asumió la presidencia. Poco después, antes de partir a Bélgica, Correa escribió en Twitter: “es obvio que el 2 de abril

vencimos a la oposición, pero no estoy muy seguro si venció la revolución ciudadana”. La Revolución Ciudadana tuvo un proyecto viable, pero su crisis abrió la posibilidad de recomposición del proyecto neoliberal que, como en el pasado, encontraría en el transformismo un mecanismo político para la disputa por la hegemonía.

El transformismo restaurado (2017-2020)

Las limitaciones del bloque progresista emergente para afianzar su hegemonía facilitaron las condiciones de posibilidad del transformismo. La coyuntura económica adversa, el panorama político polarizado, el desgaste de la base social de AP y su liderazgo fortuito le dieron mayor margen de maniobra a Lenín Moreno, que tenía dos estrategias de posicionamiento: una, como heredero del pasado inmediato; otra, como nueva alternativa de gobierno, capaz de lidiar con los conflictos socio-económicos irresueltos por Correa. No sólo eligió la segunda opción, sino que la fracción que esperaba la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana no tuvo capacidad de presión para contener el giro. Moreno asumió la presidencia proponiendo continuidad con cambios, pero rápidamente quedó claro que en realidad buscaba distanciarse del pasado; comenzó un proceso de ruptura por etapas con Correa y el correísmo. Lo trascendente de ese movimiento no es la puja de poder entre líderes, sino que desencadenó una restauración neoliberal. En poco tiempo, Moreno ha expuesto las diferentes caras de la derecha latinoamericana: desde el neoliberalismo liberal que llama al diálogo de izquierda a derecha, hasta el neoliberalismo autoritario que reprime la protesta social y suspende las garantías básicas del Estado de derecho.

En el primer intento de diferenciarse de su antecesor, Moreno se nombró a sí mismo “el presidente del diálogo” (como se citó en Télam, 2017) y lanzó Diálogo Nacional, donde participaron la izquierda no correísta y la derecha partidaria, las cámaras empresarias y el movimiento indígena. A la vez, derogó el Decreto 16, le devolvió su sede a la CONAIE por 100 años y liberó a los presos indígenas. Todo esto no fue más que una puesta en escena para mostrar que el autoritarismo de Correa había terminado. Por otro lado, el compromiso de “revisar” la Ley de Comunicación (El Comercio TV, 2017) y el nombramiento de Andrés Michelena como gerente general de la empresa de medios públicos y de Fernando Larenas al

frente de *El Telégrafo*, el principal diario público, demostraron que, más que abierto al diálogo, el gobierno estaba dispuesto a incorporar a la derecha empresarial.

El transformismo de Moreno rompió Alianza País y decapitó sus liderazgos. En abril de 2018, después de pedir una auditoría de la deuda contraída entre 2012 y 2017, Moreno concluyó que se habían encontrado anomalías en el cálculo de la deuda en relación con el PIB con el fin de contraer más deuda que la permitida por el Código de Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador. Así comenzó una ofensiva judicial contra el expresidente Correa que terminó en una condena en ausencia a ocho años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años. De esta forma, a la fractura de AP, se añadía la proscripción de su principal figura política: este fue el primer capítulo del *lawfare*, la estrategia para dirimir asuntos de índole política en el plano judicial que se ha tornado recurrente. Casado Gutiérrez (2020) reconstruye ocho casos judicializados en Ecuador que tuvieron cuestionamientos por parte de organismos internacionales. El revés de esta trama fue el retorno de las élites económicas a los niveles más altos del aparato estatal sin necesidad de ganar elecciones. Un ejemplo notorio: después de la destitución del vicepresidente electo Jorge Glas, la exlegisladora de AP designada para sustituirlo, María Alejandra Vicuña, renunció presionada por acusaciones de corrupción en su contra. El nombramiento del tercer vicepresidente, el empresario y locutor Otto Sonnenholzner, a fines de 2018, fue bien recibido por las élites económicas y los partidos de derecha. En el mismo sentido, en 2017 se creó el Consejo Consultivo Productivo-Tributario, una instancia de intermediación entre el Estado y los líderes de las cámaras empresariales que recomendarían desde reformas impositivas hasta estrategias de atracción de capitales extranjeros. La clase empresarial recuperó el canal formal de interlocución que había perdido desde la llegada de Correa al poder.

Moreno expuso su plan económico en la Ley de Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización (diciembre de 2017) y la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio fiscal (mayo de 2018), que sintetizaban el marco teórico del neoliberalismo. Los textos propusieron la liberalización del comercio exterior, la exención impositiva con vacíos legales perfectos para las grandes corporaciones, la libertad para el movimiento de capitales con la reducción progresiva del impuesto a la salida de divisas, un compromiso de austeridad fiscal

y un plan de reducción del empleo público, reforzado con la prohibición del Banco Central de actuar como prestamista del gobierno y la obligación de los bancos estatales de invertir en bonos privados. Por ley, se dictó la apertura de la economía bajo los supuestos teóricos de la ortodoxia neoliberal.³

El equipo económico de Correa había permanecido casi intacto durante la primera etapa de Moreno, pero pocos días después del anuncio del nuevo plan económico fue desmembrado y reemplazado por ideólogos neoliberales y representantes de los intereses del sector privado. Moreno solicitó la renuncia de todo su gabinete y reemplazó a la ministra de Economía María Elsa Viteri (responsable en 2008 de la auditoría de la deuda externa), por Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, miembro del Consejo Consultivo y ex asesor de Guillermo Lasso que asumió la función de aplicar el plan neoliberal. La incorporación del sector empresarial en el gabinete tenía un efecto por partida doble: por un lado, como señala Chiasson-LeBel, la creación del Consejo y la designación de Martínez cerraban el exitoso proceso rehabilitación social de la élite en la representación del estado (2019: 163); por otro, Moreno repartía la responsabilidad de la implementación del programa neoliberal con la cúpula empresarial. La incorporación de los cuadros de la élite al gobierno fue parte del proceso de convergencia de la agenda con las derechas. Guillermo Lasso, por ejemplo, no sólo reconoció haber hecho recomendaciones a Martínez después de su nombramiento como ministro, sino que a fines de 2018 presionó públicamente al gobierno para que recurriera al Fondo Monetario Internacional (La República, 2018). Moreno incorporó esa demanda y selló su compromiso con la agenda de austeridad neoliberal en febrero de 2019, cuando dio a conocer un acuerdo con el FMI por un crédito de servicio ampliado por U\$S4.200 millones, que se sumó a otros por U\$S 6.000 millones con organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones.

La política económica de austeridad y apertura visibilizan el transformismo de Moreno solo parcialmente. El viraje también abarcó la política exterior. En 2018, atribuyó el retiro de Ecuador del ALBA-TCP a la falta de acción frente a la crisis migratoria de Venezuela y se sumó al Grupo de Lima. En 2019, luego de convocar una solución democrática, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y se retiró de la OPEP y la

³ Para una reconstrucción de la política económica del primer año de la gestión de Moreno, ver Chiriboga-Tejada y Arias (2020).

UNASUR. Además del vuelco en la región, Moreno modificó la relación de Ecuador con Estados Unidos con su política de plegamiento: reactivó la vinculación económica a través de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio en la búsqueda de un Acuerdo de Libre Comercio; reestableció la cooperación militar con la designación de Oswaldo Jarrín, educado en la Escuela de las Américas, en la cartera de Defensa; y cerró el conflicto diplomático más importante quitando el asilo político a Julian Assange, que fue detenido en la embajada ecuatoriana en Londres. La visita de Moreno a Washington en abril de 2020 —la primera de un presidente ecuatoriano en 17 años— selló ese viraje.

El análisis de la política económica y la política exterior es relevante porque expone que la restauración neoliberal en Ecuador no es un asunto meramente doméstico sino parte de un entramado transnacional en el que participan los Estados, la sociedad civil globalmente concebida y los organismos internacionales. El transformismo opera a nivel doméstico como el mecanismo que busca estabilizar la dirección política de la élite económica ecuatoriana, pero también tiene una dimensión geopolítica. El neoliberalismo, en tanto orden global expansivo con pretensiones hegemónicas, regula tanto las relaciones entre los Estados como un modo de producción que vincula a las clases sociales de los países. Por medio de su política económica y exterior, Moreno acepta la posición de periferia que el neoliberalismo, dirigido por Estados Unidos, le confiere a Ecuador en el orden global. En este sentido, el acuerdo con el FMI es tanto económico como ideológico porque la austeridad que implica es una política económica, pero también una norma con la que el neoliberalismo intenta universalizar un orden social. En este punto, es importante señalar que Cox identifica las organizaciones internacionales (como el FMI) como uno de los mecanismos que expresan las normas universales de la hegemonía global porque (i) encarnan las reglas que facilitan la expansión del orden hegemónico global; (ii) son producto de ese orden hegemónico global; (iii) legitiman ideológicamente las normas del orden global; (iv) cooptan a las élites de los países periféricos, y (v) absorben ideas contrahegemónicas (1983: 62).

La primera etapa del giro se produjo sin contrapesos. La izquierda no correísta había perdido credibilidad política desde la segunda vuelta presidencial de 2017, cuando la conducción del Acuerdo Nacional por el Cambio se dividió entre el apoyo abierto a Guillermo Lasso y la negativa a acompañar a cualquiera de los dos candidatos. Por su parte, el

correísmo, sin un liderazgo claro, todavía intentaba reordenarse cuando Moreno convocó un referéndum que recibió críticas porque mezclaba preguntas sobre la inhabilitación de políticos culpables de corrupción, con otras sobre las penas de abuso sexual infantil, la prohibición de la minería en áreas protegidas (ya expresado en la constitución) y la reducción del impuesto a la especulación inmobiliaria que afectaba sólo a los más ricos (Becker y Riofrancos, 2018: 125). Si bien el resultado fue una victoria para el gobierno, Correa consiguió que, en los puntos contra los cuales hizo campaña, el No reuniera el 37% de los votos (Becker y Riofrancos, 2018: 126), que puede interpretarse como un piso de apoyo electoral relevante para la recomposición política del correísmo.

Si el referéndum había dado tranquilidad, las elecciones regionales de 2019 expusieron las limitaciones del transformismo para estabilizar el cambio político. Si bien el correísmo estaba desorganizado, la posición de Moreno era insegura. Como señala Torre, su distanciamiento de Correa no significó que la derecha y la comunidad de negocios lo adoptaran automáticamente: Moreno era un aliado ocasional, no un miembro de su coalición (2018: 131). Por otro lado, la política de austeridad implementada desde el inicio del gobierno no cosechaba resultados mínimos y eso impedía la consolidación de su liderazgo. El crecimiento fue del 3% en 2017 (BCE, 2018); un magro 1,4% en 2018 (BCE, 2019), y un 0,3% hasta el segundo trimestre de 2019 (BCE, 2019b). El impacto social del ajuste se reveló desde 2018 con el aumento sostenido de la pobreza; pese a las políticas de transferencia directa, todos los índices de distribución del ingreso empeoraron (Vivares, 2020: 121).

En este contexto, los candidatos del correísmo se presentaron a las elecciones desde un partido prestado y sin tradición de izquierda, Fuerza Compromiso Social. Solo con el impulso de Correa que hizo campaña en las redes sociales, ganaron las prefecturas de Pichincha y Manabí. El viraje de Moreno transformó el panorama político porque desarticuló la mayoría electoral del correísmo, pero no lo deshabilitó socialmente ni unió a las derechas. Moreno convirtió a Correa en su principal enemigo, pero la derecha le dio un apoyo reticente, mientras cuidaba su propio capital político, y una parte poco despreciable de la sociedad se reveló electoralmente contra esa ambición. Así, el transformismo, que debía recomponer la hegemonía neoliberal, no consiguió quebrar el empate entre las fuerzas sociales. Lejos de estabilizar el régimen, el giro de Moreno hizo todavía más precario el

equilibrio acelerando la implementación del programa neoliberal con una deriva autoritaria.

En mayo, el Decreto Ejecutivo 751 permitió la instalación de plataformas de perforación petrolera y producción de hidrocarburos en la zona ITT. La CONAIE convocó una movilización nacional “contra las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Lenín Moreno” como se citó en El Universo, 2019): la ilusión que el diálogo convocado por Moreno había despertado en la CONAIE se deshizo. El 1º de octubre, a través del Decreto Ejecutivo 883, se anunció un paquete de medidas recomendadas por el FMI para garantizar el flujo de endeudamiento: la liberalización del precio de los combustibles, la flexibilización laboral, privatizaciones y reformas de la seguridad social (Chiriboga-Tejada y Arias, 2020: 179); en compensación, aumentarían las políticas de transferencia directa para el sector más excluido. La reacción social fue inmediata. El 2 de octubre, las principales centrales sindicales e indígenas se declararon conjuntamente en lucha contra el “paquetazo” del gobierno, anunciando una huelga general y una movilización nacional hacia Quito. Así comenzó la revuelta de octubre, un movimiento interseccional de protesta contra la ofensiva neoliberal. Durante trece días, Ecuador fue escenario de diferentes formas de resistencia popular: ocupación de espacios públicos y edificios estatales (incluidos el palacio presidencial y la Asamblea Nacional), secuestros de miembros de las fuerzas armadas en zonas indígenas, y bloqueos de las autopistas y rutas. Con la movilización, recrudecía la respuesta del gobierno que desató una ola represiva inédita en la historia reciente de Ecuador (Le Quang et al., 2020: 78).

La composición de la protesta era polimórfica y las fuerzas sociales que la protagonizaban cambiaron a lo largo de los trece días que duró la revuelta: primero, predominaron las organizaciones sindicales, luego el movimiento indígena y finalmente los sectores populares urbanos. El protagonismo de este último grupo coincidió con la decisión de Moreno de desdoblar su estrategia. Por un lado, decretó el toque de queda total en Quito y se produjo el auge de la represión. Por otro, escogió al movimiento indígena como único interlocutor válido para negociar el fin de las protestas. La decisión respondió a un análisis que se demostró certero: la unidad del movimiento en las calles no se traducía en unidad política. Esto le permitió a Moreno arremeter contra el sector de los trabajadores jóvenes, precarizados y empleados públicos despedidos, que fueron identificados como promotores de la violencia, el crimen y los disturbios (Ortiz Crespo, 2020: 103). Esta capa social que ha

pagado en buena medida el costo del ajuste es, además, el núcleo de apoyo del correísmo. Mientras tanto, la CONAIE aceptó la convocatoria al diálogo y, al día siguiente de la derogación del Decreto 883, el movimiento de octubre se apagó, pero sus consecuencias todavía no se revelaron.

Conclusiones

El análisis del inesperado y drástico giro de Lenín Moreno revela, ante todo, que no se trata de una rivalidad antagónica entre dos líderes políticos ni de un cambio en la correlación de fuerzas al interior de AP sino de un caso de transformismo, esto es, una política de cooptación con el fin de decapitar un grupo social. Como hemos visto, el viraje de Moreno es de carácter estructural y trae consecuencias tanto domésticas como geopolíticas.

En segundo término, el fenómeno cobra relevancia porque en la historia política ecuatoriana este tipo de giro se ha vuelto una salida recurrente de los escenarios de crisis de hegemonía. Las condiciones de instauración del neoliberalismo en Ecuador han obturado una base de consenso sólida y la alternancia entre el transformismo y la revuelta popular han acortado los ciclos de estabilidad. El viraje de Moreno no constituye una excepcionalidad, pero tiene la particularidad de propiciar la ofensiva contra el primer proceso que logró con éxito poner en cuestión algunos de los postulados centrales del neoliberalismo. Así como la Revolución Ciudadana renovó la práctica de izquierdas en Ecuador, sus limitaciones abrieron perspectivas para la restauración de un ciclo neoliberal sin una mayoría social que lo legitime.

Además de esto, el giro de Moreno trajo consigo la modificación del panorama político ecuatoriano en más de una arista. En primer lugar, Moreno se consumió a sí mismo en su acto transformista, de modo que encontró una rápida bancarrota política. Pese a su enfrentamiento total con el correísmo, continuó siendo un socio no deseado para las élites del Ecuador, para las que no era más que un ocupante ocasional de la oficina presidencial. Sin contar tampoco con el apoyo de los movimientos populares o de algún grupo social relevante, el estallido de la crisis de 2019 fue su acta de defunción política. Moreno había intentado sumar a los movimientos indígenas en su cruzada contra Correa y el correísmo, pero este intento de alianza social estalló por los aires junto con el levantamiento de

octubre. Desde entonces, también las élites pasaron de observarlo con relucencia a empezar a considerarlo un lastre. El giro transformista dejó a Moreno en una situación excepcionalmente atípica para una figura presidencial: no solo se hizo añicos a sí mismo, sino que cualquier intento de continuidad (es decir, cualquier forma directa o indirecta de “morenismo”) murió antes de nacer. Su final fue tan triste y solitario que la candidata a la presidencia auspiciada por su partido para las elecciones de 2021 terminó expulsándolo de él.

Por otro lado, el transformismo sí ha logrado estabilizar la dirección política de la élite ecuatoriana. La reciente victoria de Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral de 2021 vuelve a situar a la fracción más tradicional de la élite al frente del aparato de Estado, sin necesidad de utilizar intermediarios ni extravagantes socios ocasionales. Después del ciclo de antagonismo que las élites protagonizaron desde 2006, durante las presidencias de Rafael Correa, las élites vieron viable colaborar con Moreno con el fin de instaurar su agenda económica sin gestionar la transición política del correísmo. Pero este tibio optimismo se convirtió en pánico en octubre de 2019, cuando la sociedad ecuatoriana estuvo al borde de un levantamiento de masas, y entendieron que una salida mediada por Moreno ya no era políticamente viable. Seguramente, la imagen de Quito convertida en un campo de batalla será una imagen con la que el gobierno de Lasso tendrá que lidiar, puesto que el nuevo gobierno deja a las élites como responsables directas de las decisiones y sus resultados.

Mientras tanto, el correísmo no obtuvo los resultados esperados. Los herederos políticos de esa experiencia no han sido capaces de unificar a los grupos sociales más afectados por las políticas neoliberales que se rebelaron contra Moreno en el levantamiento de octubre. Los candidatos apoyados por Rafael Correa y nombrados como sucesores de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz – Carlos Rabascall sufrieron un revés en las elecciones presidenciales de este año. Si bien este binomio fue la opción electoralmente mayoritaria en la primera vuelta, el resultado fue mucho más magro que el esperado y la segunda vuelta asestó una derrota profunda: contra todo pronóstico, no lograron imponerse sobre un candidato poco atractivo y ya derrotado en dos oportunidades por la plataforma política de la Revolución Ciudadana. El correísmo no pudo hacer frente a dos tipos de desafíos: unos impuestos por la persecución montada por el gobierno Moreno, otros que son déficits estructurales de su movimiento. Entre los primeros, la proscripción de Rafael Correa y el

rechazo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la inscripción del partido Revolución Ciudadana impidieron la generación de una organización partidaria propia que terminara con el limbo en el que buena parte de los activistas correístas quedaron luego de que el giro de Moreno los expulsara de Alianza País. Al mismo tiempo, el correísmo no tuvo la capacidad de superar sus propias limitaciones para hacer frente al escenario adverso: se mantuvo completamente impermeable ante las demandas de los movimientos sociales, sobre todo, indígenas y feministas. El correísmo se enfrentó de forma forzosa al desafío de reinventarse como agente de transformación; el resultado, hasta este momento, es algo decepcionante.

Al final de su análisis del transformismo, Portelli afirma que hay dos situaciones que pueden ser duraderas: la hegemonía o la dominación. En el último caso, la clase dominante neutraliza al resto sin asumir compromisos, pero este escenario plantea más dificultades para su sostenimiento porque “no se apoya sobre una base social extensa sino sobre una coerción ‘inteligente’, exponiéndose así a la formación de una eventual coalición hostil” (1977: 81). En Ecuador, las últimas elecciones demuestran que el revés de la trama de la solución transformista no es únicamente la recomposición de la Revolución Ciudadana sino también la emergencia de una tercera alternativa. La estructura política del movimiento indígena, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, hizo su mejor elección histórica y quedó fuera de la segunda vuelta por menos del 0,2%. Se encuentra hoy en condiciones de disputar la hegemonía dentro del campo de las izquierdas. El principal efecto “no deseado” del transformismo ha sido la reconfiguración del campo de las izquierdas.

Desde 1978, el movimiento indígena es el más poderoso e influyente del Ecuador, pero su compleja diversidad impidió que bajo su dirección se constituyera un proyecto con pretensiones de disputar la hegemonía al proyecto neoliberal de las élites. El correísmo, luego de un breve periodo inicial, eligió desconocer su agencia política para desatender sus demandas y reclamos. Aprovechando este enfrentamiento, la administración de Moreno ensayó un esquema en el que reconocía al movimiento indígena como un interlocutor válido, aunque ofreciéndole solo con soluciones estéticas. Durante la rebelión de octubre, Moreno intentó salvaguardar esta estrategia de interlocución asimétrica con el movimiento indígena, pero fracasó estrepitosamente. En la decisión de Moreno de escogerlo como interlocutor, el movimiento indígena ganó un tipo especial de agencia política. Con el correísmo arrinconado, se encontró en condiciones de avanzar en su organización política

independiente, un proceso que, si bien venía produciéndose desde los gobiernos de Rafael Correa, se aceleró fugazmente en este último tiempo. Gracias a su excepcional desempeño electoral, el movimiento indígena, en alianza con el partido Izquierda Democrática, será la segunda fuerza en el parlamento ecuatoriano. Ha logrado, además, quebrar el binarismo político-geográfico de más de dos siglos de historia ecuatoriana entre la costa y la sierra, identificadas como liberal/progresista y conservadora respectivamente. El movimiento indígena ha sido mayoritario en el oriente y en la sierra, mientras todavía no logra penetrar en la costa, donde el correísmo es la izquierda predominante. Si el movimiento indígena logrará consolidar su presencia política construyendo un proyecto político que integre a los golpeados por el modelo dependiente del Ecuador neoliberal y extractivista, es algo que todavía está por verse. Lo que sí es seguro es que, si esto ocurriera, el transformismo habrá mostrado su mayor peripecia.

Referencias bibliográficas

Acosta, A. (2 de noviembre de 2017). Ecuador: ¿Moreno Traidor? *Sin permiso*. Recuperado de <https://www.sinpermiso.info/textos/ecuador-moreno-traidor>

Acosta, A. y Cajas, J. (2020). El hocico de largarto ecuatoriano: entre desigualdades coyunturales y estructurales. En P. Pástor Pasmíño (Ed.) *Concentración económica y poder político en América Latina*, 401-440. CLACSO.

Alexander Rodríguez, L. (1984). Política y poder en el Ecuador, 1830-1925. *Quinto centenario*, 7, 17-54.

Anderson, P. (2019). La puesta en marcha. En *Brasil: una excepción (1964-2019)*, 15-42. Ediciones Akal.

Aricó, J. (2020). La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina. En M. Cortés (Ed.) *José Aricó. Dilemas del marxismo en América Latina*. CLACSO, 867-920.

Banco Central del Ecuador (marzo de 2018). Boletín de cuentas nacionales trimestrales, 102. Recuperado de <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1080-ecuador-crecio-30-en-2017-y-confirma-el-dinamismo-de-su-economia>

Banco Central del Ecuador (marzo de 2019). Boletín de cuentas nacionales trimestrales, 106.

Recuperado de <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1080-ecuador-crecio-30-en-2017-y-confirma-el-dinamismo-de-su-economia>

Banco Central del Ecuador (septiembre de 2019b). Boletín de cuentas nacionales trimestrales, 108. Recuperado de <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1206-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-creci%C3%B3-03-en-el-segundo-trimestre-de-2019>

Bazante Alvarado, M. M. (2016). *Incremento de la deuda pública y su efecto socioeconómico en la educación ecuatoriana, 2014-2015*. (Tesis de maestría). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Guayaquil.

Becker, M. (2017). Ecuador: Slowing a Conservative Restoration. *NACLA Report on the Americas*, 49 (2), 127-131.

Becker, M. y Riofrancos, T. (2018). A Souring Frindship, a Left Divided. *NACLA Report on the Americas*, 50 (2), 124-127.

Casado Gutiérrez, F. (2020). Lawfare en Ecuador: las acciones del Estado desacreditadas por organismos internacionales. *Nullius: revista de pensamiento crítico en el ámbito del derecho*, 1 (1), 1-17.

Castillo Merino, F.E. (2016). *Formación de una nueva élite política en el poder ejecutivo ecuatoriano, a partir de la crisis de partidos políticos (2000-2012)*. (Tesis de maestría). Departamentos de Estudios Políticos, FLACSO Ecuador.

Carol, M. (24 de abril de 2014) Rafael Correa: “Sin educación no puede haber revolución ni democracia”. *La Vanguardia*. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/internacional/20140424/54406163442/rafael-correa-educacion-revolucion-democracia.html>

Chiasson LeBel, T. (2019). Neoliberalism in Ecuador after Correa: A surprise turn on according to economic elites’ plan?. *European Review of Latin American and Caribbean Studies, Centre of Latin American Research and Documentation*, 108, 153-174.

Chiriboga Tejada, A. y Arias, L. (2020). La ruta al “paquetazo” y el retorno de la economía fondomonetarista al Ecuador. En F. Ramírez Gallegos (Ed.) *Octubre y el derecho a la resistencia*, 169-194. CLACSO.

Clark, P. y García, J. (2019). Left Populism, State Building, Class Compromise, and Social Conflict in Ecuador's Citizens' Revolution. *Latin American Perspectives*, 46 (1), 230-246.

Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (2008). Informe final de auditoría integral de la deuda ecuatoriana. Recuperado de http://cadtm.org/IMG/pdf/Informe_Deuda_Externa.pdf

Consejo Nacional Electoral (2014). Documento Elecciones generales 2013. Recuperado de http://cne.gob.ec/documents/publicaciones/2014/libro_resultados_electorales_2013-r.pdf

Conaie anuncia protestas por decreto sobre zona intangible (22 de mayo de 2019). *El Universo*. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/22/nota/7342277/conaie-anuncia-protestas-decreto-sobre-zona-intangible/>

Coutinho, N.C. (1986) Gramsci en Brasil. *Cuadernos Políticos*, 46, 24-35. Recuperado de <http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.46/CP46.4.CarlosNelsonCoutinho.pdf>

Cox, R.W. (1983). Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. *Millennium: Journal of International Studies*, 12 (2), 49-66.

Decreto Ejecutivo N° 472. 9 de julio de 2007. Ecuador. Recuperado de <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/impactassessments/Ecuador-DECRETO-472.pdf>

Decreto Ejecutivo N° 16. 4 de junio de 2013. Ecuador. Recuperado de <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu140190.pdf>

Decreto Ejecutivo N° 751. 11 de junio de 2019. Ecuador. Recuperado de <https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2019/06/registro-oficial-no506--martes-11-de-junio-de-2019-suplemento>

Decreto Ejecutivo N° 883. 2 de octubre de 2019. Ecuador. Recuperado de <https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/12094-suplemento-al-registro-ofician-no-52>

El ministro de Exteriores insta a los ciudadanos a salir a la calle y acudir a "rescatar" a Correa (30 de septiembre de 2010). *Europa Press*. Recuperado de

<https://www.europapress.es/internacional/noticia-ecuador-ministro-exteriores-insta-ciudadanos-salir-calle-acudir-rescatar-correa-20100930201713.html>

El oficialismo de Ecuador elige a Moreno como presidente de AP (1 de mayo de 2017). *Agencia EFE*. Recuperado de <https://www.efe.com/efe/america/politica/el-oficialismo-de-ecuador-elige-a-moreno-como-presidente-del-ap-correa-recibe-cargo-vitalicio/20000035-3253879>

Estrella, S. (28 de febrero de 2015a). ENIPLA pasa a llamarse Plan Familia Ecuador. *El comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/actualidad/enipla-educacionsexual-rafaelcorrea-embarazoadolescente-monicahernandez.html>

Estrella, S. (28 de marzo de 2015b). Para el presidente, con el Enipla se distribuía condones como chicles. *El comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/actualidad/rafaelcorrea-enipla-distribuia-condones-sexualidad.html>

Estrella, S. (1 de marzo de 2015c). Gobierno impulsa un plan para fortalecer a la familia. *El comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/actualidad/familia-plan-gobierno-ecuador-enipla.html>

Freidenberg, Flavia. (2011). Ecuador 2009: las elecciones que consolidan el cambio del sistema de partidos. En M. Alcántara Sáez y M.L. Tagina (Eds.) *América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-2010)*, 63-96. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Frydman, M. (2013). La cesación de pagos de la deuda externa en Ecuador. *Estudios de Economía Política y Sistema Mundial*, 18. Recuperado de <https://www.centrocultural.coop/revista/18/la-cesacion-de-pagos-de-la-deuda-externa-en-ecuador>

Giménez, J. (2 de junio de 2016). Yasuní: naturaleza contra petróleo. *El país*. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2016/06/02/planeta_futuro/1464880726_920455.html

González, M., (2019). Ecuador and the battle for Yasuni. En *The Ebb of The Pink Tide: The Decline of the Left in Latin America*, cap. 4. Pluto Press.

Gordon, T. y Webber, J. R. (2016). Tapping the veins of Ecuador. En *Blood of Extraction:*

Canadian Imperialism in Latin America, 208-241. Fernwood Publishing.

Gramsci, A. (1950). *Cartas desde la cárcel*. Editorial Lautaro.

Gramsci, A. (1984). *Cuadernos de la Cárcel, Tomo 3*. Gerratana, V. (ed). Edición Crítica del Instituto Gramsci. Ediciones Era.

Gramsci, A. (1986). *Cuadernos de la Cárcel, Tomo 4*. Gerratana, V. (ed). Edición Crítica del Instituto Gramsci. Ediciones Era.

Gramsci, A. (1999). *Cuadernos de la Cárcel, Tomo 5*. Gerratana, V. (ed). Edición Crítica del Instituto Gramsci. Ediciones Era.

Gudynas, E. (2009). La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución Ecuador. *Revista de Estudios Sociales*, 32 , 34-47.

Gardner, J.A. y Richards, P. (2019). Indigenous Rights and Neoliberalism in Latin America. En S. Ratuva (Ed.) *The Palgrave Handbook of Ethnicity*, 849-865.

Larrea Maldonado, C. (2004). Efectos de la dolarización. En *Pobreza, dolarización y crisis en Ecuador*, 29-65. Editorial Adyayala.

Lasso exhorta a Moreno a negociar con el FMI antes de que sea tarde (14 de octubre de 2018). *La República*. Recuperado de <https://www.larepublica.ec/blog/2018/10/14/lasso-exhorta-a-moreno-a-negociar-con-el-fmi-antes-de-que-sea-tarde/>

Le Quang, M., Chávez, N. y Vizuite, D. (2020). El octubre plebeyo: cronología de doce días de movilización social. En F. Ramírez Gallegos (Ed.) *Octubre y el derecho a la resistencia*, 53-84. CLACSO.

Lenín Moreno dijo que será el presidente del diálogo y la diversidad (16 de mayo de 2017). *Telam*. Recuperado de <https://www.telam.com.ar/notas/201705/189222-ecuador-lenin-moreno-presidente-dialogo-diversidad.html>

Ley de Minería. 27 de enero de 2009. Ecuador. Recuperado de https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_mineria.pdf

Ley de Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización. 28 de diciembre de 2017. Ecuador. Recuperado de <https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/LEY-ORGANICA-PARA-LA-REACTIVACION-DE-LA-ECONOMIA->

FORTALECIMIENTO-DE-LA-DOLARIZACION-Y-MODERNIZACION-DE-LA-GESTION-FINANCIERA.pdf

Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. 20 de agosto de 2018. Ecuador. Recuperado de <https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2018/08/Ley-Org%C3%A1nica-para-el-Fomento-Productivo-Atracci%C3%B3n-de-Inversiones-Generaci%C3%B3n-de-Empleo-y-Estabilidad-y-Equilibrio-Fiscal.pdf>

Ley Orgánica para la Distribución de la Riqueza. 5 de junio de 2015. Ecuador. Recuperado de <https://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2015/09-06-15-Ley-de-Herencias.pdf>

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. 15 de noviembre de 2014. Ecuador. Recuperado de https://especiales.elcomercio.com/documentos/2014/11/C%C3%B3digo_Trabajo.pdf

Ley orgánica reformatoria al Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización. 8 de junio de 2015. Ecuador. Recuperado de https://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Actualidad/2015/ley_de_plusval%C3%ADa.pdf

Mandato Constituyente N° 8. 2 de mayo 2008. Ecuador. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/2008/05/02/0001/8/463B0E041116418DBBD9558B62760D7F.html/#:~:text=Art.,dedique%20la%20empresa%20o%20empleador>

Martín-Mayoral, F. (mayo-junio de 2009) Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa. *Nueva Sociedad*, 221. Recuperado de <https://nuso.org/articulo/desde-los-anos-50-hasta-el-gobierno-de-rafael-correa/>

Mejía, A. (2002). Partidos políticos: el eslabón perdido de la representación. En *Gobernabilidad Democrática. Sistema electoral, Partidos Políticos y Pugna de Poderes en Ecuador (1978-1998)*, 287-324. Fundación Konrad Adenauer.

Mena Erazo, P. (26 de junio de 2010). Indígenas ecuatorianos alborotan cumbre del ALBA. *BBC News*. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/06/100625_ecuador_alba_ao

Modonessi, M. (2013). Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio de siglo. *Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci*, 209-236. Universidad Nacional Autónoma de México.

Modonessi, M. (2017). Usos del concepto gramsciano de revolución pasiva en América Latina. *Revista Observatorio Latinoamericano y Caribeño*, 1, 52-79.

Movimiento Alianza País (2017). *Programa de gobierno 2017 – 2021. Un programa para la sociedad, la educación, la producción y el trabajo digno*. Recuperado de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0243.pdf

Muñoz Jaramillo, F. (2014). Balance crítico del gobierno de Rafael Correa. *Ecograf*.

Ospina, P. (2000). Reflexiones sobre el transformismo: movilización indígena y régimen político en el Ecuador (1990-1998). En J. Massal y M. Bonilla. (Eds.) *Los movimientos sociales las democracias andinas*, 125-146. FLACSO Ecuador.

Ospina Peralta, P. (2017). Traición e Infidelidad: los dioses también lloran. *Informe de Coyuntura Política y Social del Ecuador*. Comité Ecuménico de Proyectos. Recuperado de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5968/1/Ospina%2c%20P.-CON-026-Traicion.pdf>

Ortiz Crespo, S. (2020). Ecuador: deriva autoritaria y levantamiento indígena popular. En F. Ramírez Gallegos (Ed.) *Octubre y el derecho a la resistencia*, 85-110. CLACSO.

Pardo, R. (9 de diciembre de 2017). Rafael Correa: “Me siento totalmente traicionado”. En *Revista La Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/mundo/articulo/me-siento-totalmente-traicionado-rafael-correa/541601>

Paz y Miño Cepeda, J. J. (13 de marzo de 2012). Consultas populares. En *América Latina en Movimiento*. Recuperado de <https://www.alainet.org/es/active/45072>

Portantiero, J.C. (2019). ¿Por qué Gramsci? En *Los usos de Gramsci*, 101-123. Editorial Tierra del Sur.

Portelli, H. (1977). Hegemonía y bloque histórico. En *Gramsci y el bloque histórico*, 65-92. Siglo XXI Editores.

Proyecto Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia. Julio de 2015. Ecuador. Recuperado de https://issuu.com/gkillcity/docs/proyecto_de_inversio__n_plan_famili

Ramírez Gallegos, F. (diciembre de 2018). El regreso del neoliberalismo a Ecuador. *Le Monde Diplomatique*. Recuperado de <https://mondiplo.com/el-regreso-del-neoliberalismo-a-ecuador>

Riofrancos, T. (invierno de 2019). What comes after extractivism? *Dissent Magazine*. Recuperado de <https://www.dissentmagazine.org/article/what-comes-after-extractivism>

Ríos, S. (18 de noviembre de 2012). Rafael Correa: “nosotros nos anticipamos al 15M con el movimiento de los forajidos”. *20 minutos*. Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/1651306/0/rafael-correa/desahucios-crisis/rajoy/>

Rojo Letón, H. (17 de febrero de 2010). “Alberto Acosta: “Quien apuesta por la extracción de recursos no logra el desarrollo”. *Comité por la abolición de las deudas ilegítimas*. Recuperado de http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=5382

Sancher Freslon, W. (2018). Lenín Moreno y la megaminería: “doble juego” y regreso a la gobernanza. En *El Gran Fraude: del correísmo al morenismo*, 146-156. Quito.

Svampa, M. (2012). Consenso de las commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. *Revista del Observatorio Social de América Latina*, 32, 15-38.

Svampa, M. (2013) La década kirchnerista: populismo, clases medias y revolución pasiva. *Lasforum*, XLIV (4), 14 -17.

TeleSur TV (9 de octubre de 2010). *Correa: ni perdón, ni olvido. Llevaremos las investigaciones hasta las últimas consecuencias*. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=VcXvV0z68-Y>

El Comercio TV (12 de abril de 2017). *Lenín moreno prometió revisar la Ley de comunicación*. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=1Bi4isWQKUc>

Thwaites Rey, M. y Ouviaña, H. (2018). El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina: auge y fractura. En *Estados en disputa*, 17-65. El colectivo.

Torre, C. de la (2018). Ecuador After Correa. *Journal of Democracy*, 29 (4), 77-88.

Vivanco, P. (28 de agosto de 2018). Ecuador’s Great Betrayal. *Jacobin*. Recuperado de

<https://jacobinmag.com/2018/08/ecuador-correa-moreno-alianza-pais>

Vivares, E. (2020). La batalla de Quito. En F. Ramírez Gallegos (Ed.) *Octubre y el derecho a la resistencia*, 111-126. CLACSO.

Webber, J. (2016). Evo Morales, *transformismo*, and the consolidation of agrarian capitalism in Bolivia. *Journal of Agrarian Change*, 17, 330-347.

Webber, J. (2017). Introduction. En *The last day of oppression, and the first day of the same*. Pluto Press.

Weisbrot, M., Johnston, J. y Merling, L. (2017). *Decade of Reform: Ecuador's Macroeconomic Policies, Institutional Changes, and Results*. Center for Economic and Policy Research.

Womack Jr, J. (2012). La economía de México durante la Revolución, 1910-1920: historiografía y análisis. *Argumentos*, 25 (69), 13-56. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952012000200002&lng=es&tlng=es.

Yépez, D. (6 de marzo de 2015). Mónica Hernández: "Plan Familia Ecuador se enfoca en la prevención de embarazo adolescente". *El comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/tendencias/entrevista-monica-hernandez-plan-familia.html>